

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

20ª REUNION — 17ª SESION ORDINARIA — 21 DE SEPTIEMBRE DE 1989

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
doctor **EDUARDO A. DUHALDE**,
y del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor **EDUARDO MENEM**

Secretarios: doctor **ALBERTO J. B. IRIBARNE** y señor **DESIDERIO LAUREANO ALMIRON**

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
AMOEDO, Julio A.
BENITEZ, Alfredo L.
BERHONGARAY, Antonio T.
BRASESCO, Luis A. J.
BRAVO HERRERA, Horacio F.
BRITOS, Oraldo N.
CORCHUELO BLASCO, Hebe
GENOUD, José
GURDULICH de CORREA, Lilitiana I.
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.
JUÁREZ, Carlos A.
MALHARRO de TORRES, Margarita
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison
POSLEMAN, Eduardo A.
RIVAS, Olijela del Valle
RODRÍGUEZ SAA, Alberto J.
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SALIM, Luis
SANCHEZ, Libardo N.
SAPAG, Elías
SOLANA, Jorge D.
TENEV, Carlos

AUSENTES, EN COMISION:

DE LA RÚA, Fernando
LEÓN, Luis A.
VELAZQUEZ, Héctor J.

AUSENTE, CON LICENCIA:

MURGUÍA, Edgardo P. V.

AUSENTES, CON AVISO:

BRAVO, Leopoldo
CONCHEZ, Pedro A.
FALSONE, José A.
GASS, Adolfo
GROSSO, Edgardo Roger M.
JORGE, Annuar
LAFFERRIERE, Ricardo E.
MAUHUM, Fernando H.
MOLINA, Pedro E.
NÁPOLI, Antonio O.
ROMERO, Juan Carlos
SAADI de DENTONE, Alicia A.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
TRILLA, Juan
VIDAL, Manuel D.

SUMARIO

1. Manifestaciones en minoría. (Pág. 2483.)
2. Por invitación del señor presidente del Honorable Senado el señor senador por Formosa, doctor Rogelio Nieves, procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 2484.)
3. Asuntos entrados:
 - I. Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 2484.)
 - II. Dictámenes de comisiones. (Pág. 2484.)
 - III. Proyecto de comunicación del señor senador Jorge por el que se solicita la reimplantación del Plan Alconafta en todo el país (S.-391/89). (Pág. 2485.)
 - IV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita la realización de obras de mejoramiento y pavimentación en la ruta nacional 40, entre Abra Pampa y El Empalme con la ruta 16, de Jujuy (S.-392/89). (Pág. 2485.)
 - V. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita la habilitación del Paso de Jama, en Jujuy (S.-393/89). (Pág. 2486.)
 - VI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita la inclusión en el plan de obras públicas de la construcción de la Ciudad Universitaria para el funcionamiento de la Universidad de Jujuy (S.-394/89). (Pág. 2486.)
 - VII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita la realización de diversas obras de mejora en la ruta nacional 34 en el tramo Pampa Blanca-Yuto, Jujuy (S.-395/89). (Pág. 2487.)
 - VIII. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se otorga un subsidio a la Municipalidad de San Pedro de Jujuy para la construcción de la estación terminal de ómnibus (S.-396/89). (Pág. 2487.)
 - IX. Proyecto de ley del señor senador Rodríguez Saá por el que se dispone la erección de un monumento en homenaje a don Juan Manuel de Rosas, en San Benito de Palermo, Capital Federal (S.-397/89). A pedido del mismo señor senador se resuelve recomendar pronto despacho a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda. (Pág. 2487.)
 - X. Proyecto de ley del señor senador Rodríguez Saá por el que se declara feriado nacional el día de la inhumación de los

restos de don Juan Manuel de Rosas (S.-398/89). A pedido del mismo señor senador se resuelve recomendar pronto despacho a la Comisión de Legislación General. (Pág. 2488.)

- XI. Proyecto de comunicación del señor senador Rodríguez Saá por el que se solicita la realización de clases alusivas a la vida y obra de don Juan Manuel de Rosas y a las razones que motivaron la reparación de sus restos (S.-399/89). A pedido del mismo señor senador se resuelve recomendar pronto despacho a la Comisión de Educación. (Pág. 2489.)
- XII. Proyecto de resolución del señor senador Rodríguez Saá por el que se dispone la confección de una placa de bronce para ser colocada en el mausoleo en el que reposarán los restos de don Juan Manuel de Rosas (S.-400/89). A pedido del mismo señor senador se resuelve recomendar pronto despacho a las comisiones de Interior y Justicia y de Presupuesto y Hacienda. (Pág. 2489.)
- XIII. Proyecto de comunicación del señor senador Rodríguez Saá por el que se solicita la confección de sellos postales en homenaje a don Juan Manuel de Rosas (S.-401/89). A pedido del mismo señor senador se resuelve recomendar pronto despacho a la Comisión de Comunicaciones. (Pág. 2490.)
- XIV. Proyecto de ley del señor senador Grosso por el que se agrega un párrafo al artículo 1º del decreto ley 21.690/56 (creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) (S.-402/89). (Pág. 2491.)
- XV. Proyecto de comunicación del señor senador Jorge por el que se solicita se declare de interés nacional el parque Termal Caimancito, la Laguna La Brea y el Palmar de Lambrisa, provincia de Jujuy, y se disponga la construcción de infraestructura para el aprovechamiento de los mismos (S.-403/89). (Pág. 2492.)
- XVI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita apoyo financiero a la provincia de Jujuy para las obras de infraestructura turística en la zona de los diques Las Maderas, La Ciénaga y Los Alisos (S.-404/89). (Página 2492.)
- XVII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita la conclusión de las obras de los canales de distribución de riego y de la usina hidroeléctrica en el dique Las Maderas, Jujuy (S.-405/89). (Pág. 2492.)

- XVIII.** Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita la construcción de un hospital regional en la localidad de Susques, Jujuy (S.-406/89). (Pág. 2493.)
- XIX.** Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita la construcción de un nuevo establecimiento carcelario en la ciudad de San Salvador de Jujuy (S.-407/89). (Pág. 2493.)
- XX.** Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita la construcción de un edificio para la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 1 en La Quiaca, Jujuy (S.-408/89). (Pág. 2493.)
- XXI.** Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita la construcción de una carretera entre las ciudades de San Salvador de Jujuy y Salta (S.-409/89). (Pág. 2494.)
- XXII.** Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita se brinde apoyo al gobierno de Jujuy, para la construcción y habilitación de un aeropuerto en la ciudad de La Quiaca (S.-410/89). (Pág. 2494.)
- XXIII.** Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita el pago a la provincia de Jujuy de los montos adeudados en concepto de regalías petroleras (S.-411/89). (Pág. 2494.)
- XXIV.** Proyecto de resolución del señor senador Brasesco por el que se invita a los señores gobernadores provinciales a exponer ante el Honorable Senado su posición con respecto a la reforma de la Constitución Nacional (S.-412/89). (Pág. 2494.)
- XXV.** Proyecto de ley del señor senador Romero Feris por el que se instituye en todo el país el documento sanitario infantil (S.-413/89). (Pág. 2495.)
- XXVI.** Proyecto de comunicación del señor senador Conchez por el que se solicita se declare de interés nacional el Primer Congreso Latinoamericano de Concejales que con el lema "Integración Latinoamericana" se llevará a cabo en Buenos Aires (S.-414/89). (Pág. 2496.)
- XXVII.** Proyecto de comunicación del señor senador Salim por el que se solicitan informes sobre la posible venta de la ciudad deportiva de Boca Juniors (S.-415/89). (Pág. 2496.)
- XXVIII.** Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se crea el Profesorado de Geopolítica Argentina (S.-416/89). (Pág. 2496.)

XXIX. Proyecto de ley del señor senador Jorge por el que se dispone la construcción de una nueva estación terminal de ómnibus en la ciudad de San Salvador de Jujuy (S.-417/89). (Pág. 2498.)

4. A moción del señor senador Berhongaray se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 16.575 que diera origen a la Ciudad Deportiva del Club Atlético Boca Juniors (C.D.-51/89). (Pág. 2498.)
5. Comienza la consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, y de Trabajo y Previsión Social en los proyectos de ley del señor senador Britos y del Poder Ejecutivo sobre creación del Instituto Nacional de Previsión Social (S.-141/89 y P.E.-86/89). (Pág. 2504.)

6. Apéndice:

Sanción del Honorable Senado. (Pág. 2519.)

—En Buenos Aires, a las 18 y 44 del jueves
21 de septiembre de 1989:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Berhongaray. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — Como ya ha transcurrido una hora y media desde el momento que se había acordado para comenzar esta sesión, solicito que se informe por Secretaría cuántos senadores se encuentran en la casa. En caso de que se superara el número de veinticuatro, pido que se proceda a pasar lista.

Sr. Presidente. — Así se hará, señor senador.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. — En la casa hay veintiséis señores senadores. Por Secretaría se están efectuando las gestiones pertinentes para que se hagan presentes los senadores que aún no están en el recinto. Dentro de diez minutos se procederá a pasar lista.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. — Por Secretaría se invitará por última vez a los senadores a concurrir al recinto. En caso de que en cinco minutos no se verifique quórum, quedará levantada la sesión.

Sr. Menem. — Que se pase lista.

más humilde al más encumbrado, de esta obra que empezó y que hoy queremos que se termine. Y, en particular, al Parlamento en sí, que con una gran visión quiere salvar un objetivo y brindarle a la ciudad de Buenos Aires una obra que necesita fundamentalmente.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Otero. — Voy a acompañar con mi voto la aprobación de este proyecto de ley. Pero como acá cada uno ha mostrado sus simpatías, quiero decir que lo haré en homenaje a Armando, que fue un visionario como comprador de un humilde título en su época. Lo haré pese a que pertenezco a una legión que no es la que se ha expresado aquí, sino nada más y nada menos que la heredera de Alumni: "La Academia", Rácing Club.

Por estas razones, no me alarma la enajenación de un predio, porque en el momento actual se está enajenando la savia del fútbol, lo que hace el fútbol, es decir, el jugador; no ya aquellos que se han consagrado en certámenes internacionales sino muchachitos de 17 ó 18 años.

En buena hora, entonces, tratemos de sanear las finanzas de Boca. Pero tendremos que hacer algo para que los clubes puedan mantener sus predios y, sobre todo, lo que hace al fútbol: el jugador.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

—En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

Sr. Salim. — Que conste que la votación resultó afirmativa por unanimidad.

Sr. Rodríguez Saá. — No, yo no voté por la afirmativa.

Sr. Bravo Herrera. — Yo tampoco.

5

CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL

Sr. Presidente (Menem). — Corresponde considerar el dictamen de las Comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Trabajo y Previsión Social —que tenía preferencia para la sesión de hoy— en los proyectos de ley del señor senador Britos y del Poder Ejecutivo sobre creación del Instituto Nacional de Previsión Social. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Iribarne). — (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Trabajo y Previsión Social han considerado el proyecto de ley del señor senador Oraldo Britos (S.-141/89) y el proyecto del Poder Ejecutivo nacional (86/89), sobre la creación del Instituto Nacional de Previsión Social; y por las razones que dará el miembro informante os aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Créase el Instituto Nacional de Previsión Social, el que funcionará como entidad de derecho público no estatal, sin fines de lucro, con individualidad jurídica, financiera, contable y administrativa, con el alcance que el Código Civil establece para las personas jurídicas.

El instituto tendrá su domicilio legal en la sede de su administración central, en la ciudad de Buenos Aires.

Art. 2º — El instituto tendrá por objeto:

- Administrar los regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia y autónomos, a cuyo efecto tendrá las facultades, atribuciones y deberes que las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente acuerdan a las Cajas Nacionales de Previsión, a la Comisión Nacional de Previsión Social, al Servicio Tratados de Reciprocidad, al Centro Unico de Procesamiento Electrónico de Datos (CUPED) y a la Unidad Banco de Datos de la Seguridad Social;
- Ejercer las facultades, atribuciones y deberes que las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta ley otorgan a la Dirección Nacional de Recaudación Previsional;
- Establecer las modalidades de recaudación de los aportes, contribuciones y tributos cuya percepción esté a su cargo, y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones previsionales;
- Resolver todo lo atinente al otorgamiento de prestaciones e inclusión en el respectivo régimen legal, de personas o entidades en carácter de afiliados, beneficiarios y obligados.

Art. 3º — El instituto será conducido y administrado por un directorio integrado por el secretario de Seguridad Social, quien lo presidirá, y nueve (9) directores. Los directores serán tres (3) en representación del Estado nacional, dos (2) en representación de los empleadores, dos (2) en representación de los traba-

jadores y dos (2) en representación de los jubilados y pensionados del régimen nacional de jubilaciones y pensiones.

Los directores serán designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en forma directa los representantes del Estado, y los restantes a propuesta de las respectivas entidades representativas.

Art. 4º — Para ser director se requiere:

- a) Ser mayor de edad;
- b) No tener pendiente proceso criminal por delito doloso, no haber sido condenado por igual delito, ni ser fallido;
- c) No haber sido exonerado de la administración pública nacional, provincial o municipal, salvo rehabilitación.

Los directores en representación de los beneficiarios deberán ser jubilados o pensionados del régimen nacional de previsión.

Los directores durarán tres (3) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos, y gozarán de la remuneración que fije el presupuesto.

El mandato de los directores estatales podrá limitarse en cualquier momento y sin expresión de causa, por resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El presidente y los directores serán responsables personal y solidariamente de las decisiones que adopten, salvo constancia expresa en acta de su disidencia, la que deberá ser fundada.

Art. 5º — El directorio tendrá las siguientes facultades, atribuciones y deberes:

- a) Organizar las dependencias y delegaciones del instituto y establecer las normas para su funcionamiento;
- b) Establecer la orientación, planeamiento, estructura y coordinación de los servicios a su cargo;
- c) Resolver todo lo concerniente al otorgamiento de las prestaciones del régimen nacional de jubilaciones y pensiones, a la inclusión de personas o entidades en el carácter de afiliados o empleadores, y a la percepción de los aportes, contribuciones y tributos cuya recaudación esté a cargo del instituto;
- d) Resolver a los fines del otorgamiento de las prestaciones, lo referente a reconocimiento de servicios, comprobación de edad, afiliación, calidad de causahabiente, rectificación de nombre o identidad de persona, y toda otra cuestión que se suscite y guarde atinencia con el objeto del instituto;
- e) Aplicar las sanciones previstas por el incumplimiento de las obligaciones emergentes del régimen nacional de jubilaciones y pensiones, con sujeción a las normas legales y reglamentarias vigentes;
- f) Aprobar el presupuesto anual de gastos y los planes de inversión;

- g) Aprobar anualmente la memoria y balance y cuentas de inversión;
- h) Comprar, permutar, grabar y vender bienes y celebrar toda clase de contratos, con sujeción al régimen general que establezca;
- i) Celebrar convenios de reciprocidad o de prestación o complementación de servicios con entidades públicas nacionales, provinciales o municipales y privadas;
- j) Aceptar subsidios, legados y donaciones;
- k) Nombrar, promover y remover al personal;
- l) Dictar las reglamentaciones y resoluciones que fueran menester para el mejor ejercicio de sus funciones;
- m) Delegar facultades de su competencia en el presidente, directores o personal superior del instituto;
- n) Elegir en la primera sesión constitutiva, entre los directores estatales, un vicepresidente que reemplazará al presidente en caso de ausencia o impedimento transitorio o vacancia del cargo, hasta tanto éste sea cubierto;
- o) Las demás facultades, atribuciones y deberes que esta ley otorga al instituto, que por la presente no estén atribuidas al presidente.

El directorio se reunirá como mínimo una vez por mes, y sesionará con la mitad más uno de sus miembros. Sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría de los presentes.

Art. 6º — El presidente tendrá las siguientes facultades, atribuciones y deberes:

- a) Ejercer la representación del instituto en todos sus actos;
- b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la ley y sus reglamentaciones, como asimismo las decisiones que adopte el directorio;
- c) Convocar y presidir las reuniones del directorio, en las que su voto será decisivo en caso de empate;
- d) Convocar al directorio a reunión extraordinaria cuando lo considere necesario o lo soliciten por lo menos tres (3) directores;
- e) Otorgar licencias al personal y atender la disciplina, aplicando sanciones;
- f) Ordenar las investigaciones y procedimientos que estime convenientes;
- g) Disponer la apertura de cuentas bancarias, en la forma y condiciones que sean necesarias;
- h) Delegar facultades de su competencia en personal superior del instituto, excepto aquéllas que le hubieran sido delegadas por el directorio;
- i) Adoptar las medidas que siendo de competencia del directorio no admitan dilación, someténdolas a consideración del mismo en la sesión inmediata.

Art. 7º — El patrimonio del instituto se integrará con:

- a) Los ingresos en concepto de aportes, contribuciones y tributos con destino al régimen nacional de jubilaciones y pensiones;
- b) Los bienes muebles e inmuebles que sean de titularidad de las cajas nacionales de previsión y de la Dirección Nacional de Recaudación Previsional, los que a partir de la vigencia de esta ley quedan transferidos al instituto que se crea por la presente, y los afectados al funcionamiento de los mencionados organismos, de la Comisión Nacional de Previsión Social, del Servicio Tratados de Reciprocidad, del Centro Único de Procesamiento Electrónico de Datos (CUPED) y de la Unidad Banco de Datos de la Seguridad Social, los que serán transferidos en propiedad y sin cargo al instituto;
- c) Todo otro recurso que corresponda ingresar al patrimonio del instituto.

Art. 8º — El presupuesto de gastos administrativos y de funcionamiento del instituto no podrá exceder del cinco por ciento (5 %) del total de los recursos del régimen de jubilaciones y pensiones cuyo ingreso se estime para el ejercicio.

Art. 9º — Las cuentas corrientes que fueren necesarias para el desenvolvimiento del instituto serán abiertas únicamente en instituciones bancarias oficiales nacionales, provinciales o municipales, o en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.

Art. 10. — El instituto estará sometido exclusivamente a la jurisdicción nacional, pudiendo optar por la justicia ordinaria de las provincias cuando fuere actor.

El representante legal del instituto absolverá posiciones por oficio.

Los organismos regionales, delegaciones y agencias del instituto carecerán de legitimación para ser demandados en juicio.

El instituto estará excluido del régimen de la Ley de Contabilidad.

Art. 11. — En el instituto funcionará una sindicatura, que tendrá por cometido la fiscalización y control de los actos de los órganos y funcionarios de aquél, vinculados con el cumplimiento de las normas y disposiciones de la presente ley y su reglamentación.

La sindicatura será desempeñada por un síndico titular. Habrá además un síndico adscripto, quien colaborará con aquél en el ejercicio de sus funciones, y lo reemplazará en caso de ausencia o impedimento transitorio o vacancia del cargo, en este último supuesto hasta tanto se designe nuevo síndico titular.

Los síndicos serán designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el que podrá también removerlos.

El síndico titular participará de las reuniones del directorio con voz pero sin voto, debiendo dejarse constancia en las actas de las opiniones que emita.

La sindicatura deberá presentar mensualmente por escrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un informe sobre la marcha del instituto. Sin perjuicio de ello deberá informar de inmediato al mencionado ministerio

en caso de disconformidad con alguna decisión de un órgano o funcionario del instituto, o de cualquier irregularidad de que tome conocimiento.

Art. 12. — Para ser síndico se requiere no tener ninguna de las inhabilidades previstas en los incisos b) y c) del artículo 4º, poseer título universitario habilitante de abogado o en una disciplina atinente al tratamiento de información económico-financiera, y acreditar como mínimo cinco (5) años en el ejercicio de la profesión.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fijará la remuneración de los síndicos, la que estará a cargo del instituto.

Art. 13. — La sindicatura tendrá los siguientes deberes, funciones y atribuciones:

- a) Fiscalizar los actos decisorios de los órganos y funcionarios del instituto en los aspectos jurídicos, financieros, contables y administrativos;
- b) Dictaminar sobre el presupuesto anual de gastos y los planes de inversión, y la memoria y balance y cuentas de inversión, antes de su aprobación por el directorio;
- c) Solicitar al presidente del instituto la convocatoria del directorio cuando a su juicio la urgencia de los asuntos a considerar lo requiera;
- d) Los demás que le asigna la presente ley.

Para el cumplimiento de sus deberes, funciones y atribuciones, la sindicatura tendrá la más amplias facultades de verificación y control a cuyo efecto dispondrá de acceso a toda clase de documentación y podrá recabar las informaciones que estime necesarias, sean ellas sistemáticas o accidentales, y realizar las verificaciones, comprobaciones y compulsas que juzgue conveniente.

El instituto pondrá a disposición de la sindicatura el personal que la misma requiera para el cumplimiento de los deberes, funciones y atribuciones asignadas por la presente.

Art. 14. — Las resoluciones dictadas por el instituto en los supuestos contemplados en los incisos a) y b) del artículo 8º de la ley 23.473, modificada por su similar 23.605, serán apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, con sujeción a las normas de las leyes citadas.

Art. 15. — El instituto creado por la presente ley se considerará continuador de los organismos y dependencias mencionados en el artículo 2º, incisos a) y b) de la presente. En consecuencia, asumirá la totalidad de los derechos y obligaciones de los referidos organismos y dependencias.

Art. 16. — El contrato y relación de trabajo del personal que a partir de la vigencia de la presente ley ingrese al instituto se registrarán por las disposiciones del régimen de contrato de trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias, reconociéndosele a todos los efectos la antigüedad acumulada en cualquiera de los organismos mencionados en los incisos a) y b) del artículo 2º. Quedan excluidos de esta disposición los miembros del directorio.

Art. 17. — El personal que a la fecha de vigencia de la presente reviste o preste servicios en las cajas nacionales de previsión, Dirección Nacional de Recaudación Previsional, Comisión Nacional de Previsión So-

cial, Servicio Tratados de Reciprocidad, Centro Único de Procesamiento Electrónico de Datos (CUPEd) y en la Unidad Banco de Datos de la Seguridad Social, quedará transferido al instituto y sujeto a las disposiciones del artículo 16, salvo que optare por ser reubicado en la administración pública nacional, en cuyo caso, hasta tanto se concrete dicha reubicación, mantendrá el régimen jurídico y escalafonario vigente a la fecha de entrada en vigor de la presente, y continuará prestando servicios en el instituto.

La opción prevista en el párrafo precedente deberá presentarse por escrito ante el respectivo servicio administrativo dentro del plazo de treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha en que el director o apruebe el primer presupuesto. La opción, una vez ejercida, será irrevocable.

En caso de que el agente no formule la opción en el plazo indicado en el párrafo anterior quedará automáticamente transferido al instituto que por la presente se crea, y sujeto a las disposiciones del artículo 16.

Art. 18. — Las disposiciones de la ley 22.955 serán aplicables por el término de cinco (5) años a contar desde la vigencia de la presente, al personal a que se refiere el artículo 16, que en virtud del mismo quedare transferido al instituto.

Art. 19. — El personal a que se refiere el artículo 17, que por aplicación del mismo quedare sujeto al artículo 16, tendrá derecho, en caso de ser despedido sin justa causa a partir de la vigencia de la presente ley, a una indemnización equivalente a dos (2) meses de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año o durante el plazo de prestación de servicio, sin tope alguno, además de la que el régimen de contrato de trabajo prevé por falta de preaviso, si ésta correspondiera.

El importe de la indemnización por antigüedad en ningún caso podrá ser inferior a dos (2) meses de sueldo calculados en base al sistema del párrafo anterior.

Art. 20. — Mientras no se apruebe el presupuesto del instituto y se efectúen las designaciones correspondientes, el personal continuará percibiendo sus haberes con cargo a los presupuestos de los organismos en que revistan.

Art. 21. — Hasta tanto el instituto haga uso de las facultades y atribuciones que le otorga esta ley, continuarán aplicándose las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente.

Art. 22. — Todos los poderes o mandatos otorgados por las cajas nacionales de previsión y la Dirección Nacional de Recaudación Previsional, o sus funcionarios autorizados como también a letrados de la Comisión Nacional de Previsión Social, para representarlos ante cualquier fuero, jurisdicción o instancia, que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente, continuarán subsistentes hasta tanto los respectivos poderes o mandatos sean sustituidos.

Art. 23. — Créase una comisión de saneamiento del régimen nacional de previsión integrada por dos (2) representantes de cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación, tres (3) del Poder Ejecutivo nacional y

tres (3) del instituto que se crea por esta ley, la que tendrá por cometido establecer el monto de los pasivos del régimen nacional de previsión social y proponer las medidas necesarias para su saneamiento definitivo mediante los mecanismos de financiación pertinentes.

Art. 24. — Facúltase al Poder Ejecutivo para dictar todas las medidas de carácter contable y administrativo que fueren menester para el cumplimiento de la presente ley.

Art. 25. — Sustitúyese el inciso e) del artículo 39 bis del decreto ley 1.285/58, incluido por el artículo 89 de la ley 23.473, por el siguiente:

e) En los conflictos que se susciten entre organismos de previsión social de distintas jurisdicciones territoriales, comprendidos en el régimen de reciprocidad jubilatoria.

Art. 26. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con el artículo 105 del reglamento este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 20 de septiembre de 1989.

Alberto J. Rodríguez Saá. — Oraldo N. Britos. — Luis A. J. Brasesco. — Hebe Corchuelo Blasco. — Horacio F. Bravo Herrera. — Alfredo L. Benítez. — Eduardo Menem. — Carlos A. Juárez.

ANTECEDENTE

Proyecto de ley del señor senador Britos

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Créase el Instituto Nacional de Previsión Social, con el carácter de ente público no estatal y con los alcances y funciones determinados en la presente ley.

Art. 2º — El instituto creado por la presente ley cumplirá las siguientes funciones:

- Todas las atribuciones y funciones que las leyes vigentes al momento de promulgación de la presente acuerdan a las distintas cajas nacionales de previsión y al Servicio Tratados de Reciprocidad dependiente de la Secretaría de Seguridad Social, a la Comisión Nacional de Previsión Social y a la Dirección Nacional de Recaudación Previsional;
- Entender en los conflictos que se susciten entre los organismos previsionales comprendidos en el sistema de reciprocidad jubilatoria, o entre ellos y sus afiliados o beneficiarios, en razón de la aplicación del nombrado sistema;
- Recabar, clasificar, programar y coordinar toda la información necesaria para el funcionamiento del sistema nacional de seguridad social. Tales funciones serán llevadas a cabo en coordinación con los demás organismos integrantes de dicho sistema sobre la base de la centralización de la información;

- d) Establecer los mecanismos de recaudación de aportes y contribuciones, fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones previsionales;
- e) Celebrar acuerdos con organismos provinciales, municipales o privados en materia de reciprocidad jubilatoria;
- f) Resolver todo lo atinente al otorgamiento de prestaciones e inclusión en el respectivo régimen legal, de personas o entidades en el carácter de afiliados o empleados;
- g) Proyectar y aprobar los planes de inversión; y el presupuesto de gastos.

Art. 3º — El instituto será conducido y administrado por un directorio integrado por diez miembros, correspondiendo cuatro de ellos a los trabajadores en actividad, designados por la Confederación General del Trabajo; cuatro a los trabajadores en pasividad, designados por organismos de jubilados y pensionados más representativos, y dos al Estado nacional designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El directorio deberá dictar su reglamento interno y designará al presidente y demás autoridades.

Art. 4º — Los directores durarán tres años en sus funciones pudiendo ser reelectos y gozarán de la remuneración que establezca el presupuesto.

Art. 5º — El directorio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2º, tendrá las siguientes facultades, atribuciones y deberes:

- a) Organizar las dependencias y delegaciones del instituto y establecer las normas para su funcionamiento;
- b) Establecer la orientación, planeamiento, estructura y coordinación de los servicios a su cargo;
- c) Resolver todo lo concerniente al otorgamiento de las prestaciones del régimen nacional de jubilaciones y pensiones, a la inclusión de personas o entidades en el carácter de afiliados o empleadores, y a la percepción de los aportes, contribuciones y tributos cuya recaudación esté a su cargo;
- d) Aplicar las sanciones previstas por el incumplimiento de las obligaciones emergentes del régimen nacional de jubilaciones y pensiones, con sujeción a las normas legales y reglamentarias vigentes;
- e) Proyectar y aprobar el presupuesto anual;
- f) Confeccionar anualmente las memorias y el balance y cuentas de inversión;
- g) Comprar, permutar, gravar y vender bienes, y celebrar toda clase de contratos y convenios de reciprocidad o de prestación o complementación de servicios con entidades públicas nacionales, provinciales o municipales y privadas;
- h) Aceptar subsidios, legados y donaciones;
- i) Nombrar, promover y remover al personal;
- j) Dictar las reglamentaciones y resoluciones que fueren menester para el mejor ejercicio de sus funciones;

- k) Delegar facultades de su competencia en el presidente, directores, o personal superior del instituto;
- l) Las demás facultades, atribuciones y deberes que esta ley otorga al instituto;
- ll) El directorio sesionará con la mitad más uno de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría de los presentes.

Art. 6º — El presidente tendrá las siguientes facultades, atribuciones y deberes:

- a) Ejercer la representación del instituto en todos sus actos;
- b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la ley y sus reglamentaciones, como asimismo las decisiones que adopte el directorio.
- c) Convocar y presidir las reuniones del directorio;
- d) Convocar al directorio a reunión extraordinaria cuando así lo considere necesario o lo soliciten por lo menos tres (3) directores;
- e) Autorizar y aprobar las adquisiciones y servicios y disponer la apertura de cuentas bancarias, en forma y condiciones que sean necesarias;
- f) Adoptar las medidas que siendo de competencia del directorio, no admitan dilación, sometiendo a la consideración del mismo en la sesión inmediata.

Art. 7º — El patrimonio del instituto se integrará con:

- a) Los ingresos en conceptos de aportes, contribuciones y tributos, cuya percepción está a cargo del instituto;
- b) Los bienes muebles e inmuebles de que sean titulares las cajas nacionales de previsión y la Dirección Nacional de Recaudación Previsional, los que a partir de la vigencia de esta ley quedan transferidos de pleno derecho al instituto que se crea por la presente, y los afectados al funcionamiento de los mencionados organismos y de la Comisión Nacional de Previsión Social y del Servicio Tratados de Reciprocidad, los que serán transferidos en propiedad y sin cargo al instituto por el Poder Ejecutivo.

Art. 8º — El presupuesto de gastos administrativos y de funcionamiento del instituto no podrá exceder del cuatro por ciento (4 %) del total de los recursos del régimen nacional de jubilaciones y pensiones cuyo ingreso se estime para el ejercicio.

Art. 9º — Las cuentas corrientes que fueren necesarias para el desenvolvimiento del instituto serán abiertas únicamente en instituciones bancarias oficiales, nacionales, provinciales o municipales o en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.

Art. 10. — El instituto estará sometido exclusivamente a la jurisdicción nacional, pudiendo optar por la justicia ordinaria de las provincias cuando fuere actor.

El representante legal del instituto absolverá posiciones por oficio.

El instituto estará excluido del régimen de la Ley de Contabilidad.

Art. 11. — La fiscalización y control de los actos del directorio y autoridades del instituto estará a cargo de una sindicatura.

La sindicatura será desempeñada por un síndico titular quien en caso de ausencia será reemplazado por un síndico suplente, designados ambos por la Secretaría de Estado de Seguridad Social.

El síndico participará de las reuniones del directorio con voz pero sin voto, debiendo dejarse constancia en las actas de las opiniones que emita.

La sindicatura deberá presentar un informe mensual a la Secretaría de Estado de Seguridad Social sobre la marcha del instituto a quien deberá informar de inmediato ante la existencia de cualquier irregularidad.

Art. 12. — El síndico, sus secretarios y el personal administrativo que se desempeñe bajo sus órdenes dependerán de la Secretaría de Estado de Seguridad Social, cuyo titular fijará su encuadramiento escalafonario y sus remuneraciones.

Art. 13. — El contrato y relación de trabajo del personal del instituto se regirá por las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.

Art. 14. — El instituto creado por la presente ley se considerará continuador de los organismos y dependencias que se mencionan en el artículo 2º inciso a) de ésta. En consecuencia, asumirá la totalidad de los derechos y obligaciones de los referidos organismos y dependencias.

Art. 15. — El personal que reviste o preste servicios en las cajas nacionales de previsión, Dirección Nacional de Recaudación Previsional, Comisión Nacional de Previsión Social y Servicio Tratados de Reciprocidad, será transferido al instituto, salvo que dentro de los quince días hábiles de notificarse de esa transferencia manifestase por escrito y en forma expresa su voluntad en contrario, en cuyo caso será transferido a otro organismo de la administración pública.

Art. 16. — Hasta tanto el instituto haga uso de las facultades que le otorga esta ley, continuarán aplicándose en lo que no se opongan a la misma, las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente.

Mientras el instituto no haga uso de las aludidas facultades, las cajas nacionales de previsión, la Dirección Nacional de Recaudación Previsional y la Comisión Nacional de Previsión Social continuarán funcionando como secciones del instituto.

Art. 17. — Todos los poderes otorgados por las cajas nacionales de previsión y la Dirección Nacional de Recaudación Previsional, o sus funcionarios autorizados, como también a letrados de la Comisión Nacional de Previsión Social, para representarlos ante cualquier fuero, jurisdicción o instancia, que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente, continuarán subsistentes hasta tanto los respectivos manda-

tarios sean sustituidos por otros designados de conformidad con las normas de esta ley.

Art. 18. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Oraldo N. Britos.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

En una moderna democracia —como la que aspiramos todos los argentinos— el pueblo debe tener la mayor cantidad de canales de participación en la elaboración y reparto de la riqueza que él mismo crea con su esfuerzo cotidiano.

Los partidos políticos constituyen irremplazables elementos de participación popular en el poder, empero, éstos no agotan las posibilidades participativas de la población. La afirmación contraria conlleva una vetusta concepción del hombre y del Estado, fundamentada en el individualismo burgués decimonónico.

Entre el individuo y el Estado, existen organizaciones intermedias que nacen y se desarrollan sobre el principio de la solidaridad social, como libre expresión de sectores sociales. El alto grado de complejidad de las sociedades modernas ha incrementado la necesidad de participación de estos agrupamientos intermedios, con miras a subsanar la desprotección de los segmentos más débiles del cuerpo social. Es por ello que una verdadera democracia en los umbrales del siglo XXI, no puede conformarse con la mera participación periódica de los ciudadanos a través del sufragio, debe además asignar un rol protagónico a las organizaciones intermedias en la gestión, conducción y toma de decisiones en las instituciones y organismos, cuyo accionar de un modo u otro afecta a los intereses de aquéllas.

Este proyecto ha sido concebido sobre la base de las ideas expuestas precedentemente y persuadidos de que las únicas alternativas de estructuración de la sociedad no son las que sectores interesados presentan como excluyentes, esto es: o un privatismo de raigambre individualista que en los hechos sólo beneficia a poderosos intereses transnacionales, totalmente ajenos a los del pueblo de la patria; o bien la macrocefalia estatal generadora de una burocracia paralizante de cualquier expresión vital de la sociedad. En efecto, este proyecto insinúa una tercera vía en la que se refiere al rol del Estado y se dirige a la consolidación de la democracia argentina, al abrir nuevos cauces a la participación popular.

Nada más democrático que sean aquellos que generan o generaron con su esfuerzo las riquezas del país, quienes administren los dineros que ellos mismos aportan o aportaron con la finalidad de afrontar las contingencias de vejez, invalidez o muerte.

Ningún sistema puede ser más eficiente que aquel que pone en manos de los asalariados de hoy y de ayer, ese salario diferido que son las prestaciones jubilatorias.

Nadie mejor que los representantes de los trabajadores y los jubilados para desbaratar las distintas maniobras fraudulentas que disminuyen la recaudación previsional en perjuicio de la base financiera del sistema y por ello, en última instancia, en detrimento de los trabajadores y jubilados.

Por lo demás, este proyecto tiende a consagrar el principio de unidad de acción, lo cual constituye una necesidad impostergable a los efectos de lograr una mayor economía y eficacia en el Sistema Nacional de Seguridad Social.

En lo sustancial este proyecto se asienta sobre los principios tenidos en cuenta en la estructuración originaria de los más importantes organismos del sistema previsional argentino, así mismo han sido particularmente considerados tanto los reclamos de las organizaciones directamente ligadas al sistema nacional de previsión, ya sea como aportantes, beneficiarios o agentes de retención de aportes.

Oraldo N. Britos.

Buenos Aires, 14 de agosto de 1989.

Al Honorable Congreso de la Nación:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de poner a su consideración un proyecto de ley por el cual se modifica la estructura y organización del régimen nacional de jubilaciones y pensiones, recreándose el Instituto Nacional de Previsión Social, organismo de vieja raigambre en el campo de la seguridad social argentina.

En efecto, creado el 27 de octubre de 1944 por decreto ley 29.176, luego modificado el 24 de septiembre de 1953 por la ley 14.236, el Instituto Nacional de Previsión Social fue finalmente suprimido en diciembre de 1967 por la ley 17.575.

Con la ley citada en último término se modificó sustancialmente la estructura y organización del régimen nacional de previsión, pasándose de un sistema de conducción con participación de los sectores interesados en los directorios de las cajas nacionales de previsión, a otro diametralmente opuesto, que transformó a dichas cajas en dependencias de la administración pública nacional, conducidas de manera unipersonal por directores generales nombrados por el Poder Ejecutivo, sistema que se mantiene todavía hoy.

Actualmente los organismos que integran el régimen nacional de previsión social, si bien funcionan como entes descentralizados, no cuentan con una capacidad operativa suficiente para cumplir plenamente los importantes cometidos que la ley les asigna. Por otra parte, al estar sujetos a las limitaciones propias de la administración pública nacional, están imposibilitados de actuar con la libertad de acción indispensable para resolver con celeridad las tramitaciones a su cargo.

Por ello, el proyecto adjunto, al recrear el Instituto Nacional de Previsión Social, le asigna el carácter de entidad de derecho público no estatal sin fines de lucro, con individualidad jurídica, financiera, contable y administrativa.

En cuanto a la conducción del régimen, se pone a cargo de un directorio en el cual están representadas las partes interesadas: Estado, trabajadores, empleadores y beneficiarios del régimen nacional de jubilaciones y pensiones, acatándose así el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto prevé que las entidades de seguridad social deben poseer autonomía financiera y

económica, y ser administradas por los interesados con participación del Estado.

Se prevé el funcionamiento de una sindicatura que tendrá por cometido la fiscalización y control de los actos de los órganos y funcionarios del instituto, vinculados con el cumplimiento de las normas y disposiciones de la ley proyectada y su reamentación. Dicha sindicatura estará integrada por un síndico titular y uno adscrito, designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El proyecto de ley que se propone constituye un paso de fundamental importancia para la reorganización y racionalización de los organismos encargados de administrar el régimen nacional de jubilaciones y pensiones, y con su sanción se logrará cumplir los objetivos fundamentales en una materia que tanto interesa al bienestar de la población.

Esos objetivos pueden sintetizarse en la unidad de conducción y la descentralización operativa, de modo que se aseguren la celeridad en los trámites y decisiones, la inmediatez en las relaciones con los diversos sujetos que participan de la actividad de los mencionados organismos, la simplicidad en los procedimientos, la centralización de la información, el empleo de técnicas adecuadas de administración, contabilidad e informática, y una óptima utilización de los recursos humanos y materiales.

Por ello solicito de vuestra honorabilidad tenga a bien darle prioridad a su tratamiento y aprobación.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 472

CARLOS S. MENEM.
Alberto J. Triaca.

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º— Créase el Instituto Nacional de Previsión Social, el que funcionará como entidad de derecho público no estatal, sin fines de lucro, con individualidad jurídica, financiera, contable y administrativa, con el alcance que el Código Civil establece para las personas jurídicas.

El instituto tendrá su domicilio legal en la sede de su administración central, en la ciudad de Buenos Aires.

Art. 2º— El instituto tendrá por objeto:

- a) Administrar los regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia y autónomos, a cuyo efecto tendrá las facultades, atribuciones y deberes que las leyes vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente acuerdan a las cajas nacionales de previsión, a la Comisión Nacional de Previsión Social y al Servicio Tratados de Reciprocidad de la Secretaría de Seguridad Social;
- b) Ejercer las facultades, atribuciones y deberes que las leyes vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta ley otorgan a la Dirección Nacional de Recaudación Previsional;
- c) Entender en los conflictos que se susciten entre los organismos de previsión social comprendi-

dos en el régimen de reciprocidad jubilatoria, o entre ellos y sus afiliados o beneficiarios, con motivo de la aplicación del citado régimen;

- d) Establecer las modalidades de recaudación de los aportes, contribuciones y tributos cuya percepción esté a su cargo, y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones previsionales;
- e) Resolver todo lo atinente al otorgamiento de prestaciones e inclusión en el respectivo régimen legal, de personas o entidades en carácter de afiliados, beneficiarios y obligados.

Art. 3º — El instituto será conducido y administrado por un directorio integrado por el secretario de Seguridad Social, quien lo presidirá, y nueve (9) directores. Los directores serán tres (3) en representación del Estado nacional, dos (2) en representación de los empleadores, dos (2) en representación de los trabajadores, y dos (2) en representación de los jubilados y pensionados del régimen nacional de jubilaciones y pensiones.

Los directores serán designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en forma directa los representantes del Estado, y los restantes a propuesta de las respectivas entidades representativas.

Art. 4º — Para ser director se requiere:

- a) Ser mayor de edad;
- b) No tener pendiente proceso criminal por delito doloso, no haber sido condenado por igual delito, ni ser fallido;
- c) No haber sido exonerado de la administración pública nacional, provincial o municipal, salvo rehabilitación.

Los directores en representación de los beneficiarios deberán ser jubilados o pensionados del régimen nacional de previsión.

Los directores durarán tres (3) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos, y gozarán de la remuneración que fije el directorio.

En cualquier momento podrá limitarse, sin expresión de causa, por resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al mandato de los directores estatales, como también el de los restantes directores, en este segundo supuesto a solicitud escrita de las respectivas entidades representativas, las que simultáneamente deberán proponer al o a los reemplazantes.

El presidente y los directores serán responsables personal y solidariamente de las decisiones que adopten, salvo constancia expresa en acta de su disidencia, la que deberá ser fundada.

Art. 5º — El directorio tendrá las siguientes facultades, atribuciones y deberes:

- a) Organizar las dependencias y delegaciones del instituto y establecer las normas para su funcionamiento;
- b) Establecer la orientación, planeamiento, estructura y coordinación de los servicios a su cargo;
- c) Resolver todo lo concerniente al otorgamiento de las prestaciones del régimen nacional de ju-

bilaciones y pensiones, a la inclusión de personas o entidades en el carácter de afiliados o empleadores, y a la percepción de los aportes, contribuciones y tributos cuya recaudación esté a cargo del instituto;

- d) Resolver a los fines del otorgamiento de las prestaciones, lo referente a reconocimiento de servicios, comprobación de edad, afiliación, calidad de causahabiente, rectificación de nombre o identidad de persona, y toda otra cuestión que se suscite y guarde atinencia con el objeto del instituto;
- e) Aplicar las sanciones previstas por el incumplimiento de las obligaciones emergentes del régimen nacional de jubilaciones y pensiones, con sujeción a las normas legales y reglamentarias vigentes;
- f) Aprobar el presupuesto anual de gastos y los planes de inversión;
- g) Aprobar anualmente la memoria y balance y cuentas de inversión;
- h) Comprar, permutar, gravar y vender bienes y celebrar toda clase de contratos, con sujeción al régimen general que establezca;
- i) Celebrar convenios de reciprocidad o de prestación o complementación de servicios con entidades públicas nacionales, provinciales o municipales y privadas;
- j) Aceptar subsidios, legados y donaciones;
- k) Nombrar, promover y remover al personal;
- l) Dictar las reglamentaciones y resoluciones que fueran menester para el mejor ejercicio de sus funciones;
- m) Delegar facultades de su competencia en el presidente, directores o personal superior del instituto;
- n) Elegir en la primera sesión constitutiva, entre los directores estatales, un vicepresidente que reemplazará al presidente en caso de ausencia o impedimento transitorios o vacancia del cargo, hasta tanto éste sea cubierto;
- o) Las demás facultades, atribuciones y deberes que esta ley otorga al instituto, que por la presente no estén atribuidas al presidente.

El directorio se reunirá como mínimo una vez por mes, y sesionará con la mitad más uno de sus miembros. Sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría de los presentes.

Art. 6º — El presidente tendrá las siguientes facultades, atribuciones y deberes:

- a) Ejercer la representación del instituto en todos sus actos;
- b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la ley y sus reglamentaciones, como asimismo las decisiones que adopte el directorio;

- c) Convocar y presidir las reuniones del directorio, en las que su voto será decisivo en caso de empate;
- d) Convocar al directorio a reunión extraordinaria cuando lo considere necesario o lo soliciten por lo menos cinco (5) directores;
- e) Otorgar licencias al personal y atender la disciplina, aplicando sanciones;
- f) Ordenar las investigaciones y procedimientos que estime convenientes;
- g) Disponer la apertura de cuentas bancarias, en la forma y condiciones que sean necesarias;
- h) Delegar facultades de su competencia en personal superior del instituto, excepto aquellas que le hubieran sido delegadas por el directorio;
- i) Adoptar las medidas que siendo de competencia del directorio no admitan dilación, sometiéndolas a consideración del mismo en la sesión inmediata.

Art. 7º — El patrimonio del instituto se integrará con:

- a) Los ingresos en concepto de aportes, contribuciones y tributos con destino al régimen nacional de jubilaciones y pensiones, cuya percepción esté a cargo del instituto;
- b) Los bienes muebles e inmuebles que sean de titularidad de las cajas nacionales de previsión y de la Dirección Nacional de Recaudación Previsional, los que a partir de la vigencia de esta ley quedan transferidos de pleno derecho al instituto que se crea por la presente, y los afectados al funcionamiento de los mencionados organismos, de la Comisión Nacional de Previsión Social y del Servicio de Tratados de Reciprocidad, los que serán transferidos en propiedad y sin cargo al instituto;
- c) Todo otro recurso que corresponda ingresar al patrimonio del instituto.

Art. 8º — El presupuesto de gastos administrativos y de funcionamiento del instituto no podrá exceder del cuatro por ciento (4 %) del total de los recursos del régimen de jubilaciones y pensiones cuyo ingreso se estime para el ejercicio.

Art. 9º — Las cuentas corrientes que fueren necesarias para el desenvolvimiento del instituto serán abiertas únicamente en instituciones bancarias oficiales nacionales, provinciales o municipales, o en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.

Art. 10. — El instituto estará sometido exclusivamente a la jurisdicción nacional, pudiendo optar por la justicia ordinaria de las provincias cuando fuere actor.

El representante legal del instituto absolverá posiciones por oficio.

Los organismos regionales, delegaciones y agencias del instituto carecerán de legitimación para ser demandados en juicio.

Art. 11. — En el instituto funcionará una sindicatura, que tendrá por cometido la fiscalización y control de los

actos de los órganos y funcionarios de aquél, vinculados con el cumplimiento de las normas y disposiciones de la presente ley y su reglamentación.

La sindicatura será desempeñada por un síndico titular. Habrá además un síndico adscripto, quien colaborará con aquél en el ejercicio de sus funciones, y lo reemplazará en caso de ausencia o impedimento transitorios o vacancia del cargo, en este último supuesto hasta tanto se designe nuevo síndico titular.

Los síndicos serán designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el que podrá también removerlos.

El síndico titular participará de las reuniones del directorio con voz pero sin voto, debiendo dejarse constancia en las actas de las opiniones que emita.

La sindicatura deberá presentar mensualmente por escrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un informe sobre la marcha del instituto. Sin perjuicio de ello, deberá informar de inmediato al mencionado ministerio en caso de disconformidad con alguna decisión de un órgano o funcionario del instituto, o de cualquier irregularidad de que tome conocimiento.

Art. 12. — Para ser síndico se requiere no tener ninguna de las inhabilidades previstas en los incisos b) y c) del artículo 4º, poseer título universitario habilitante de abogado o en una disciplina atinente al tratamiento de información económico-financiera, y acreditar como mínimo cinco (5) años en el ejercicio de la profesión.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establecerá las normas referidas a las atribuciones y funcionamiento de la sindicatura, y fijará la remuneración de los síndicos, la que estará a cargo del instituto.

Art. 13. — Las resoluciones dictadas por el instituto en los supuestos contemplados en los incisos a), b) y e) del artículo 8º de la ley 23.473, modificada por su similar 23.605, serán apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, con sujeción a las normas de las leyes citadas.

Art. 14. — El instituto creado por la presente ley se considerará continuador de los organismos y dependencias mencionadas en el artículo 2º, incisos a) y b) de la presente. En consecuencia, asumirá la totalidad de los derechos y obligaciones de los referidos organismos y dependencias.

Art. 15. — El contrato y relación de trabajo del personal que a partir de la vigencia de la presente ley ingrese al instituto se regirán por las disposiciones del régimen de contrato de trabajo (t. o. 1976) y sus modificatorias, reconociéndosele a todos los efectos la antigüedad acumulada en cualquiera de los organismos mencionados en los incisos a) y b) del artículo 2º. Quedan excluidos de esta disposición los miembros del directorio.

Art. 16. — El personal que a la fecha de vigencia de la presente reviste o preste servicios en las cajas nacionales de previsión, Dirección Nacional de Recaudación Previsional, Comisión Nacional de Previsión Social o Servicio de Tratados de Reciprocidad, quedará transferido al instituto y sujeto a las disposiciones del artículo 15, salvo que optare por ser reubicado en la administración pública nacional, en cuyo caso, hasta tanto se concrete dicha reubicación, mantendrá el régimen jurídico y escalafonario vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente, y continuará prestando servicios en el instituto.

La opción prevista en el párrafo precedente deberá presentarse por escrito ante el respectivo servicio administrativo, dentro del plazo de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la vigencia de la presente. La opción, una vez ejercitada, será irrevocable.

En caso que el agente no formule la opción en el plazo indicado en el párrafo anterior, quedará automáticamente transferido al instituto que por la presente se crea, y sujeto a las disposiciones del artículo 15.

Art. 17. — El personal al que se refiere el artículo anterior, que por aplicación del mismo quedare sujeto al artículo 15, tendrá derecho, en caso de ser despedido sin justa causa a partir de la vigencia de la presente ley, a una indemnización equivalente a dos (2) meses de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año o durante el plazo de prestación de servicio, sin tope alguno, además de la que el régimen de contrato de trabajo prevé por falta de preaviso, si ésta correspondiera.

El importe de la indemnización por antigüedad en ningún caso podrá ser inferior a dos (2) meses de sueldo calculados en base al sistema del párrafo anterior.

Art. 18. — Mientras no se apruebe el presupuesto del instituto y se efectúen las designaciones correspondientes, el personal continuará percibiendo sus haberes con cargo a los presupuestos de los organismos en que revistan.

Art. 19. — Hasta tanto el instituto haga uso de las facultades y atribuciones que le otorga esta ley, continuarán aplicándose las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente.

Art. 20. — Todos los poderes o mandatos otorgados por las cajas nacionales de previsión y la Dirección Nacional de Recaudación Previsional, o sus funcionarios autorizados, como también a letrados de la Comisión Nacional de Previsión Social, para representarlos ante cualquier fuero, jurisdicción o instancia, que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente, continuarán subsistentes hasta tanto los respectivos mandatarios sean sustituidos por otros designados de conformidad con las normas de esta ley.

Art. 21. — Facúltase al Poder Ejecutivo para dictar todas las medidas de carácter contable y administrativo que fueren menester para el cumplimiento de la presente ley.

Art. 22. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS S. MENEM.
Alberto J. Triaca.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — Señor presidente: justamente después de haber cumplido setenta y cuatro años en nuestro país el sistema previsional —día festivo ayer por nuestros compañeros de la clase

pasiva— tenemos la oportunidad de discutir nuevamente un proyecto que el suscripto elevara oportunamente a esta Cámara en 1986.

Recuerdo que el resto de los bloques nos acompañó; recuerdo perfectamente que tratamos por todos los medios de que la Cámara baja lo convirtiera en ley. Lamentablemente las cosas no salieron bien.

Hoy tengo la suerte de que este Poder Ejecutivo haya tomado nuestro proyecto, que es similar al que en 1944 nos diera el general Juan Domingo Perón. Recuerdo también que en aquel momento uno de los exponentes de la iniciativa fue don Atilio Bramuglia, a quien acompañó en su accionar un hombre de esta Cámara como es el actual senador por el Neuquén, doctor Solana.

Este instituto tuvo vigencia entre los años 1944 y 1967 y por única vez se dio participación a los compañeros activos y de la clase pasiva. Pero pasaron los tiempos, se usaron nuevas recetas y se pensó bajo distintos gobiernos que el ajuste siempre debía recaer sobre la clase pasiva.

Frente a esto decía hace unos minutos a mis colegas que tenemos que hacernos una autocrítica, porque generalmente cuando hacemos las campañas políticas decimos que vamos a reivindicar a estos tres millones de jubilados y pensionados. Pero cuando llegamos a ser gobierno empleamos el viejo sistema de que las recaudaciones pasen primero por Hacienda, y usualmente los secretarios de Hacienda son bastante duros para entregar lo que deben a las cajas.

Con este proyecto no damos únicamente participación a los compañeros jubilados sino también a los activos, a los señores empresarios y al Estado.

Queremos también dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, cuando dice que las entidades de seguridad social deben poseer autonomía financiera y económica y ser administradas por los interesados con participación del Estado. Esto no ha venido ocurriendo y hoy nos encontramos con que los intereses de la clase pasiva se han visto burlados casi en forma permanente. Es decir, al no ser controladas por los propios jubilados, las cajas se encuentran con que las empresas del Estado les adeudan más de 110 mil millones de australes. Si analizamos cuál es la deuda de las empresas privadas, encontraremos que la misma supera los 200 mil millones de australes. Esto es la evasión permanente. No existe el control por parte de quienes no se interesan en lo que les pasa a los jubilados.

En este Parlamento, nosotros hemos demostrado a través del tiempo con muchos proyectos

que estábamos interesados en el tema, y hoy lo podemos concretar. Estoy orgulloso de que sea este Ejecutivo, estoy orgulloso de que mis asesores el doctor Urriza, la doctora Juárez, el licenciado Casabelos hayan colaborado para que yo pudiera presentar el proyecto; estoy más que orgulloso por la circunstancia de que el señor secretario de Seguridad Social ha visitado esta Cámara en tres oportunidades para reiterar el deseo del señor presidente de la República de contar con este instrumento.

Por estas razones, vamos a introducirle solamente dos modificaciones: una sugerida por el representante de la Unión Cívica Radical, doctor Berhongaray, en lo que se refiere al artículo 10, en la parte en la que se determina que el Instituto estará excluido del régimen de la Ley de Contabilidad.

Asimismo, hay un error en el artículo 18, que remite al artículo 16, cuando debió haberlo hecho al 17.

En concordancia con lo conversado con los demás bloques, y con el apoyo de las organizaciones representativas de los compañeros que trabajan en las cajas, que son los sindicatos de ATE, UPCN y APOSP, solicito el voto favorable para este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Señor presidente: este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que cuenta como antecedentes con una ley anterior y otro proyecto presentado por el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, senador Britos, tuvo acogida por unanimidad en esa comisión. El radicalismo, por su parte, adhiere totalmente a la creación del Instituto Nacional de Previsión Social.

Bien se ha dicho que el tiempo transcurrido y las experiencias recogidas nos indican que no tenemos que seguir tropezando con la misma baldosa. Es necesario recrear el Instituto Nacional de Previsión Social.

Quiero dejar constancia de que las observaciones que voy a formular no deben ser tomadas como propuestas de modificación del dictamen, que yo mismo he firmado y que ha sido objeto de consenso. Las observaciones que haré a algunos artículos habrán de quedar para su eventual consideración en el futuro, si es que mejor sirven a las finalidades del instituto.

Además de las dos observaciones de carácter técnico que hizo llegar el señor senador Berhongaray, con las cuales estamos de acuerdo, y que fueron incorporadas al consenso, quiero dejar constancia de que yo era de la opinión de

que el personal del instituto estuviese contemplado dentro de las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, con una variante para el personal que en este momento opte por quedarse. Hay personal con mucha antigüedad que, por su experiencia, por el trabajo que ha realizado durante toda su vida y por su idoneidad, tiene que permanecer dentro del nuevo instituto que creamos. Creo que ese personal que se transfiere tiene algún derecho adquirido, que se refleja en la estabilidad de que debe gozar. Para ese personal que se transfiere al Instituto propongo la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo y un régimen de despido con justa causa. Además, para evitar la rémora del sumario administrativo, que en nuestro país sirve para dilatar y entorpecer el procedimiento, sería conveniente que el Instituto realizara una información sumaria como la prevista en la Ley de Contrato de Trabajo, versión primera, en la cual tenía que ser escuchado quien sería suspendido o se le iba a aplicar una sanción disciplinaria y que el Instituto, cuando determinaba el cese de servicios, indicara una justa causa y que ella en el caso de no ser aceptada, fuera motivo de discusión judicial. Pero si la justicia resolvió que no había justa causa, que ese agente no tuviera derecho a indemnización sino que se reincorporara a sus funciones únicamente cobrando los salarios caídos.

Sr. Britos. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Brasesco. — Sí, señor senador.

Sr. Britos. — Quería recordarle que el Instituto para nada prescinde al personal. Es decir, va a dar un plazo de treinta días en el que el personal puede optar, pero esto de ninguna manera significa que alguien va a ser exonerado, y en el caso de que un trabajador quiera irse como empleado del Estado, se le asegura una indemnización doble.

Sr. Brasesco. — Estoy totalmente de acuerdo, señor senador.

Yo me refiero a la circunstancia de que el personal que va a ingresar y se va a quedar en el Instituto, pierde un derecho que algunos lo tienen desde hace veinte o veinticinco años, que es la estabilidad en sentido propio, es decir, la que tiene el empleado del Estado, según la cual únicamente puede ser cesanteado a través de un sumario, como dicen las normas legales vigentes.

En síntesis, si el personal es nuevo queda comprendido por las normas de la Ley de Contrato de Trabajo, que prevé el despido causado

y el despido sin causa. Si es sin causa, se le debe pagar la indemnización. Con esto estamos totalmente de acuerdo.

Ahora bien, yo apunto al personal que opta, al personal que se queda, que quizá sea el más idóneo, que tal vez esto sea lo único que ha hecho en su vida, y que lo ha hecho con pasión. Si a veces las cajas han funcionado mal o no han funcionado, seguramente no ha sido por la gente que estaba adentro trabajando sino por aquellos que no le dieron trabajo para cumplir sus funciones.

Entonces, mi inquietud y mi sugerencia apunta a que el viejo personal que opta, simplemente mantenga la estabilidad en sentido propio, de modo que sólo pueda ser despedido con causa de acuerdo con las normas de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir previa sustanciación de sumario y escuchando a la persona a la que se imputa la justa causa del despido.

Con ese procedimiento, quien considere que la causa por la que es despedido no es justa, recurrirá a los tribunales. Y en el hipotético caso de que los tribunales resuelvan que no hubo justa causa, se reincorporará.

Estas normas podrán tener una vigencia real de seis, siete u ocho años y tendrá importancia para un grupo de gente que en este momento constituye la base fundamental de la operatoria de las cajas de jubilaciones.

Después, cuando se sancione la ley de negociación colectiva de la administración pública, ellos estarán sujetos al salario que determine dicha negociación colectiva.

Es decir que se tendrá en cuenta el articulado de la Ley de Contrato de Trabajo, con la única excepción del despido sin causa para los que en la actualidad son empleados y funcionarios, es decir para todos aquellos que opten. En cambio, para el personal nuevo, que recién ingresa, sí tendrá plena vigencia el articulado de la Ley de Contrato de Trabajo.

¿Por qué digo esto? Por la sencilla razón de que no cercenamos un derecho adquirido por los trabajadores del Estado que optan por seguir trabajando en el Instituto, por continuar siendo empleados del Estado, por esforzarse y trabajar para que nuestro sistema previsional se perfeccione, en lugar de cobrar la indemnización.

Los empleados son los brazos del sistema. Sin hombres idóneos que estén adentro, por más decretos, por más leyes que haya, por más hombres de buena voluntad y voluntarismo que haya, el asunto no caminará.

De esa forma nosotros hacemos un acto de justicia y no enervamos desde ningún punto de vista los principios fundamentales y rectores de

este proyecto. Además, me atrevería a decir que el Poder Ejecutivo no haría cuestión a esta actitud porque, fundamentalmente, lo que se persigue con la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, en particular en lo que respecta al despido causado e incausado, es contemplar la situación de las nuevas dotaciones. En ese caso cabría la aplicación completa de la ley, tal cual se desea. Incluso dentro de cuatro o cinco años ya no estará la gente que es objeto de nuestra preocupación y ese artículo quedará prácticamente muerto.

Considero que mi planteo es serio, como ustedes muy bien saben no está viciado de ninguna actitud demagógica ni nada por el estilo. Sé que ustedes lo pueden comprender. No pretendo convencerlos tampoco. Pero creo que es una circunstancia que se podría contemplar en la discusión en particular del proyecto y, de esa forma, no perjudicaríamos a nadie; haríamos esa pintura con mejores colores, dado que esto no tiene incidencias en el sistema y no interfiere en la política económica del gobierno ni en la de recorte del gasto público. Además, filosóficamente, se ajusta a principios que desde el punto de vista jurídico —no político— tanto unos como otros hemos sustentado siempre.

Indudablemente, este proyecto de ley persigue la transformación del Instituto, el que contaría con personal con estabilidad impropia. Pero habría lugar para un grupo determinado de gente que en este momento necesitamos.

Señor presidente: solamente quería dejar en claro esta inquietud que para mí es fundamental y adelantar que votaremos favorablemente este proyecto en general, tal cual lo hemos manifestado en el dictamen de comisión. Tal vez, cuando tratemos algunos artículos en particular, expresemos alguna otra observación.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Señor presidente: deseo anticipar el apoyo de nuestro bloque a este proyecto de ley por el que se crea el Instituto Nacional de Previsión Social.

Consideramos que el carácter que se le da a la entidad; como de derecho público no estatal sin fines de lucro, otorgándole individualidad jurídica, financiera, contable y administrativa, es un avance importante. Sin ninguna duda, esta autonomía va a resultar en beneficio del sector pasivo del país.

Asimismo, es conveniente destacar que en la conducción de este Instituto se da participación tanto al Estado como a los trabajadores, empleadores y beneficiarios del régimen. Ello evita

la conducción unipersonal y estatal que ha venido rigiendo hasta este momento.

Entendemos que esta unidad de conducción y de descentralización operativa va a dar celeridad a los trámites y decisiones y, especialmente, va a preservar el destino de los fondos asignados a este Instituto.

Señor presidente: más que una observación —que sí voy a formular en el momento del tratamiento en particular— solicito una explicación. Advierto que la indemnización que se establece para el personal que opte por su cesantía voluntariamente duplica la que corresponde de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo y, también, con respecto al criterio adoptado en los anteriores proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, tanto en el referido a la reforma del Estado como en el de emergencia económica en donde, en virtud precisamente de la emergencia, se estableció un mes de sueldo por año de servicio. Y creo que si este cambio de criterio tiene una justificación, debería ser expresada en esta Cámara para satisfacción nuestra.

Recogiendo la inquietud del señor senador por Entre Ríos, creo que su intención, su propuesta, es loable pero, de alguna manera, complicaría el sistema y permitiría la coexistencia de distintos tipos de empleados y con distintos regímenes laborales dentro del Instituto.

Creo que están preservados los derechos de cada uno de los empleados al permitirseles la opción que a ellos más les convenga; y, en última instancia, si no quieren optar pueden ser reubicados en otras áreas del Estado conservando la estabilidad, diríamos absoluta —no recuerdo el término exacto.

También quiero transmitir otra preocupación al cuerpo. En general, los intentos de creación tanto de estos institutos como de las empresas del Estado, surgen a partir de la propuesta de que la cuestión sea manejada en el marco de la contratación privada, es decir, de la Ley de Contrato de Trabajo; pero, lamentablemente, a poco de andar, a través de los convenios colectivos de trabajo surge la estabilidad propia y, entonces, lo que en un primer momento se vislumbraba o fue proyectado como un beneficio para el manejo administrativo, la eficiencia —los objetivos de la creación de los institutos o empresas del Estado—, convierte a esos entes en organismos burocráticos al producirse la estabilidad de los empleados.

En definitiva, señor presidente, anticipo el apoyo a esta iniciativa, con las observaciones que formularemos durante la consideración en particular.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: en la reunión que celebramos previamente tuvimos ocasión de exponer algunas inquietudes que fueron satisfechas. Por lo tanto, en homenaje a la brevedad, con el deseo de allanar el tratamiento de este proyecto, de acuerdo con lo resuelto en la reunión de presidentes de bloque, y manifestando mi conformidad en general ya que la iniciativa implica, sin duda alguna, una medida acertada, solicito que las notas que tengo preparadas al respecto sean insertadas en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente (Menem). — Como no hay quórum reglamentario, corresponde llamar para votar.

—Se llama para votar.

Sr. Brasesco. — Considero que el pedido formulado por el señor senador Aguirre Lanari podría ser considerado en el momento en que se proceda a la votación en general, como ocurre comúnmente cuando se solicita agregar documentación sobre lo que se desea exponer. De esa manera se puede proseguir con el debate sin interrupciones.

Sr. Solana. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Solana. — Aprovecho este pequeño intervalo hasta que se obtenga el quórum para hacer presente que el voto afirmativo que daré en esta ocasión constituye para mí un acto de justicia y tiene, también, un sentido emotivo por un hecho que ha destacado el señor senador por San Luis y que agradezco.

Hace más de cuarenta y cinco años yo iniciaba esta vida de servicio público —que ya lleva demasiado tiempo— en la Secretaría de Trabajo y Previsión, en agosto de 1943, a las órdenes del señor coronel Perón y de don Juan Atilio Bramuglia, en la Dirección Nacional de Previsión Social.

En ese momento, como joven abogado que comenzaba su carrera, tuve ocasión de participar en los actos iniciales de constitución del Instituto Nacional de Previsión Social, que sirvió para organizar y modernizar todo el régimen previsional argentino de aquellos años y que funcionó con gran prestigio y corrección hasta que fue transformado por otro sistema de gobierno.

Es decir que lo que se reconstituye ahora es un organismo probado que servirá para modernizar el sistema previsional, bastante desquicia-

do en el ordenamiento de los fondos, sus atribuciones, sus autoridades, la participación de los jubilados y el control parlamentario.

De manera que daré mi voto afirmativo con la absoluta convicción de que estamos contribuyendo a crear un organismo con gran sentido social y utilidad para el país.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Romero Feris. — Señor presidente: hace unas horas los presidentes de bloque analizamos este proyecto de ley por el que se crea el Instituto de Previsión Social. Coincidimos en prácticamente todos sus aspectos, salvo en algunas cuestiones que serán señaladas en el tratamiento en particular.

Quiero adelantar, señor presidente, mi voto favorable para la aprobación de este proyecto. Además, deseo destacar la importancia que tiene por su sensibilidad social, por la forma en que está integrado el directorio de dicho Instituto y por su contenido, que comparto plenamente.

Si bien desearía continuar exponiendo mis puntos de vista sobre este tema, no lo haré atento la posibilidad de que en algún momento no contemos con quórum reglamentario. En consecuencia, para que este proyecto sea aprobado en la sesión de hoy y de acuerdo con lo convenido en la reunión de presidentes de bloque, solicito que algunos de los apuntes que tengo sobre mi banca conteniendo un análisis pormenorizado de esta iniciativa se inserten en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — Señor presidente: mientras logramos contar con quórum reglamentario, deseo hacer dos aclaraciones.

En principio, se presupone que el Instituto podría dejar de lado a gente con una gran vocación y experiencia —mujeres y hombres calificados—. Debemos reconocer que no todos los empleados públicos tienen la sensibilidad social de quienes se desempeñan en esta área y quizá estén peor remunerados.

Por otro lado, señor presidente, también deseo explicar el motivo de la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo en lo que se refiere a la indemnización. Esta quizá no exista, porque de ninguna manera pensamos prescindir del personal, ya que si el compañero o compañera que se desempeñan en estas funciones lo desean, pueden pasar a otra repartición estatal. De manera alguna planteamos, entonces, la prescindibilidad de determinada cantidad de personal.

Formulo estas dos aclaraciones. Cuando se trate el proyecto en particular voy a hacer la salvedad que se ha solicitado para los artículos 10 y 18.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Señor presidente: en oportunidad de haberse pasado lista no me encontraba presente en el recinto. Sin perjuicio de haber hecho uso de la palabra, quiero dejar constancia de mi presencia.

Sr. Presidente (Menem). — Así se hará, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Mazzucco. — Señor presidente: tampoco yo me encontraba presente en el momento en que se pasó lista, pero deseo dejar constancia de mi presencia en el recinto, prácticamente, desde el comienzo de la sesión.

Sr. Presidente (Menem). — Así se hará, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Romero Feris. — Señor presidente: quisiera saber cuántos senadores se encuentran en la casa.

Sr. Presidente (Menem). — Hay 24 señores senadores, y estamos haciendo las gestiones pertinentes para que baje al recinto el legislador que falta para formar quórum.

Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — Señor presidente: deseo informar que acaban de hacerse gestiones para invitar al recinto al señor senador que falta para lograr quórum. Nos comunican que vendrá dentro de pocos instantes. De manera que solicito que la Cámara aguarde unos minutos más.

Por otra parte, deseo señalar en este breve paréntesis que en estas sesiones, cada vez que nos toca actuar, ponemos de manifiesto nuestro decidido sentido de colaboración. A veces, estamos forzados por los tiempos y otras, por las circunstancias, pero creo que estamos dando testimonio del cumplimiento de una palabra que comprometimos en su momento y que debe ser ratificada cada vez que la ocasión así lo requiera.

Deseo agregar que si algunas bancas están vacías es por un defecto de información. Muchos de los señores senadores de nuestro bloque pensaban que hoy no se iba a sesionar. Realmente, de buena fe, se sintieron sorprendidos. Quizás, no recordaron que ayer se aprobó la preferencia

para la sesión de hoy. El vértigo de estos días a veces hace que muchas cosas se nos pasen por alto, tal vez por un poco de descuido.

Hemos tenido que llamar a algunos señores senadores a sus domicilios, y han concurrido. Queremos cumplir. Estamos dando testimonio de nuestra colaboración. Creo que este clima de entendimiento que en esta época prevalece en el Congreso y, fundamentalmente, en el Senado de la Nación tiene que ser un ejemplo que debe perdurar más allá de las circunstancias y los compromisos.

En la reunión de presidente de bloque hicimos algunas objeciones a determinados artículos de este proyecto. Inmediatamente fueron receptadas, tal como lo señaló el miembro informante.

Somos conscientes de que en esta época de grandes delegaciones que está realizando el Congreso en el Poder Ejecutivo debemos establecer la mayor cantidad de mecanismos de control por aquello de que "a mayor delegación, mayor control."

Este criterio ha sido aceptado, receptado y verdaderamente meritado por el oficialismo y como así lo reconocemos, también hemos presentado un proyecto para crear la Controlaría del Congreso. Se trata de un organismo de control que va a funcionar dentro de la órbita de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración a efectos de realizar un efectivo control parlamentario, el que se refiere a oportunidad y legalidad. A veces los legisladores no podemos llegar a realizar estos tipos de tareas por no contar con los medios necesarios, en lo que a organismos permanentes se refiere, que cumplan esta función.

Con la mayor buena fe, en cada oportunidad...

Sr. Britos. — Agréguele control de asistencia.

Sr. Berhongaray. — Y control de asistencia. Correcto.

Sr. Sánchez. — Es muy importante.

Sr. Berhongaray. — Es importante; realmente muy importante.

Quiero aclarar que algunos de los senadores que no han asistido seguramente habrán pensado que hoy no habría sesión. Pero ustedes son testigos de que muchos nos quedamos hasta las tres y media de la madrugada, escuchando el informe —el brillante informe, como dijimos— que realizara el señor senador Jiménez Montilla acerca del proyecto de modificación del Código Penal en su fundamentación en general. Quizá, si en ese momento se hubiera realizado un con-

trol de asistencia, se habrían comprobado algunas ausencias de legisladores que hoy están presentes...

Sr. Brasesco. — Vamos a tener que poner un apuntador como las mangas por las que pasa el ganado.

Sr. Romero Feris. — Hay que informarle al bloque que los jueves hay sesión.

Sr. Brasesco. — Quiero dejar constancia de que el noventa por ciento de los señores senadores aquí sentados son de Boca.

Sr. Romero Feris. — ¿Hay número en la casa, señor presidente?

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia informa que acaba de recibir el dato de que en la casa han quedado solamente veintitrés señores senadores, razón por la cual tendría que dar por levantada la sesión.

Sr. Romero Feris. — Pido a los presidentes de bloque que informen a sus colegas cuáles son los días de sesión.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Sánchez. — Señor presidente: nadie puede discutir el esfuerzo que se realiza con el fin de tratar de entregar al gobierno una serie de instrumentos para manejar a la sociedad argentina.

Hoy nos vamos una vez más, una vez más, repito, con el espíritu mortificado al no poder votar un proyecto de ley de la trascendencia del que en estos momentos estamos tratando, postergando de esa manera la posibilidad cierta de tener un mejor manejo en lo que respecta a la previsión social de la República.

Una vez más, reitero, dejo sentada mi formal protesta y mi solicitud a las autoridades de la Cámara para que dentro de la reglamentación vigente se dispongan los mecanismos necesarios para llamar la atención a los legisladores de la Nación, a los representantes de las distintas provincias, a efecto de que, más allá de la ligereza con que muchas veces nos movemos, tengamos conciencia del momento dramático que vivimos, en el que necesitamos el aporte de todos.

Sr. Rodríguez Saá. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: deseo dejar sentada nuestra responsabilidad señalando que el primer tema que trataremos en la próxima sesión será éste, atento las expectativas que hay al respecto.

Sr. Berhongaray. — Señor presidente: si bien en minoría no tenemos capacidad de resolución, comparto el criterio sustentado por el señor senador por San Luis.

Sr. Presidente (Menem). — Como no existe quórum y teniendo en cuenta que no hay en la

casa número suficiente de señores senadores para formarlo, queda levantada la sesión.

—Son las 20 y 29.

MARIO A. BALLESTER.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.